CONSTANCIA. A despacho del señor juez las presentes diligencias, a fin de que se surta la impugnación formulada por el señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** frente al fallo proferido el **8 de octubre de 2020**, por el **Juzgado Décimo Civil Municipal de Manizales**. Sírvase Proveer.

Noviembre 12 de 2020

JUAN FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020)

PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIONANTE	ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ
ACCIONADO	CAFESALUD EPS - MEDIMAS EPS
VINCULADO	FONDO DE PENSIONES PORVENIR
RADICADO	17001-40-03-010-2020-00387-02
SENTENCIA	112

Proc
ede el
Despacho
a desatar
el recurso

de impugnación formulado por el señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ**, frente al fallo proferido el **8 de octubre de 2020**, por el **Juzgado Décimo Civil Municipal de Manizales, Caldas**, dentro de la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

La actual acción de amparo, fue formulada por el señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ**, en busca de la protección de sus derechos fundamentales a la **SALUD, VIDA, DIGNIDAD Y MÍNIMO VITAL**; además, para que se ordene a la entidad accionada le reconozca y pague las incapacidades médicas que superan los 540 días continuos de incapacidad que le fueron prescritas desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 4 de octubre de 2020.

Como fundamento de las pretensiones expuso que tiene 43 años de edad, convive con su esposa de 52 años de edad, se encuentra afiliado a la EPS MEDIDAS y al fondo pensional PORVENIR S.A., en razón a las afecciones que padece desde el año 2015 le han prescrito incapacidades medicas continuas, las cuales se las ha pagado la EPS CAFESALUD desde el día 1 hasta el 180, POVENIR S.A. desde el día 181 hasta el 540, es decir, las prescritas hasta el 24 de mayo de 2016.

Que el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales ordenó a la liquidada EPS CAFESALUD le pagara las incapacidades superiores a los 540 días continuos de incapacidad, correspondientes a las prescritas entre el 26 de abril de 2016 y el 23 de noviembre de 2016, no obstante, desde el 11 de noviembre de 2016 le fue suspendido el pago de tales rubros.

Que la entidad prestadora de servicios de salud a la que actualmente se

encuentra adscrito le negó el pago de los rubros pretendidos con el actual trámite bajo el argumento que ello no era de su cargo y porque aún no se ha definido el tema de su calificación de invalidez.

Que durante el largo tiempo que ha estado incapacitado ha recurrido a préstamos de dinero y a la caridad de familiares para poder sufragar sus necesidades básicas y las de su cónyuge, pero que su calidad de vida se ha disminuido desde que se encuentra incapacitado, pues no puede trabajar, no percibe dinero alguno y debe pagar entre otras cosas arrendamiento por valor de \$500.000 y facturas de servicios públicos por \$100.000.

Luego de ser admitida la presente acción de amparo constitucional, las entidades que concurren a estas diligencias se pronunciaron de la siguiente manera:

La **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.**, indicó que en atención a lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y Decreto 1333 de 2018, el pago de las incapacidades médicas continuas superiores a los 540 días corresponde efectuarlo a la entidad prestadora de servicios de salud a la cual se encuentre adscrito el usuario, en razón a ello y teniendo en cuenta que las incapacidades pretendidas por el señor Alexander Hernando González Suarez con el actual trámite superan dicho lapso y que las comprendían entre los días 181 y 540 ya se las pagó, debe declararse la improcedencia de la actual acción de tutela en su contra.

MEDIMAS EPS, manifestó que en razón a que desde el 22 de julio de 2019 a través de la Resolución 7172 se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar a CAFESALUD EPS, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección A, ordenó a MEDIMAS EPS S.A.S. efectuar el pago de las incapacidades reconocidas por la primer EPS citada y que revisadas las bases de datos no evidencia que las incapacidades médicas aquí reclamadas por el señor Alexander Hernando González Suarez estén registradas como reconocidas por CAFESALUD EPS en liquidación, motivo por el que estima no que no le asiste de deber de pagar los rubros pretendidos con el actual trámite.

1.1. Decisión de primera de Primera Instancia:

Mediante fallo del 8 de octubre de 2020, la juez a quo puso fin a la primera instancia negando por improcedente la acción de tutela para amparar los derechos fundamentales invocados por el señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** frente a MEDIMAS EPS, fundada en que las incapacidades que pretende el mencionado actor constitucional fueron prescritas desde noviembre de 2016 y solo 4 años después acude a este mecanismo constitucional para procurar su reconocimiento y pago, motivo por el que estima no se cumple con el principio de inmediatez dado que se debió actuar y acudir al juez de tutela dentro un tiempo razonable y que tampoco evidenció una justificación sensata para tal tardanza.

1.2. Impugnación:

Dentro del término legal, el precitado fallo fue impugnado por el señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** quien argumentó que dicha determinación desconoce sus derechos fundamentales como persona que cuenta con especial protección constitucional, dado que no se tuvo en cuenta las circunstancias fácticas por el expuestas en los hechos del libelo genitor y que la transgresión de sus preceptos fundamentales se viene dando desde el mes de noviembre de 2016 de forma sistemática, progresiva y sin que nunca haya cesado la misma hasta la fecha actual, dada la falta de pago de las incapacidades médicas que de forma continua le han prescrito y que MEDIMAS EPS se ha negado a pagarle, que no acudió antes al juez constitucional fue por desconocimiento de temas jurídicos y legales, motivo por el que estima que la sentencia objetada debe ser revocada y en su lugar ampararse sus derechos fundamentales.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a este despacho determinar en sede de impugnación, si el fallo de primera instancia fue acertó al negar por improcedente la acción de tutela de la referencia, porque presuntamente no se configura el principio de inmediatez propio de este mecanismo constitucional o si por el contrario tal como lo sostiene el actor e impugnante dicho principio si se encuentra satisfecho y en consecuencia se deben amparar sus derechos fundamentales invocados.

2.2. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de incapacidades médicas

En tratándose de la procedencia de la acción de tutela, mediante la cual se pretenda la protección derechos de naturaleza prestacional, si bien su juez natural y proceso correspondiente es el previsto ante la jurisdicción laboral; existen situaciones en las cuales los medio procesales ordinarios no cumplen con los requisitos de idoneidad y eficacia para la protección de las garantías imploradas; para tal efecto y por vía jurisprudencial se ha fijado como sub-regla de procedencia a la vía procesal constitucional en aquellos casos en las cuales se esté en presencia de una persona respecto de la cual predique una especial protección constitucional, o que a su vez el reconocimiento, satisfacción y pago de incapacidades constituyen su único medio de subsistencia e incluso su reconocimiento tutelar o en otros términos, su relevancia constitucional se da en la medida de evitar un perjuicio irremediable, presupuestos que por sí viabilizan el reconocimiento si a ello hubiere lugar a través del medio procesal consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.

Frente a este particular, la jurisprudencia del alto Tribunal Constitucional fijado las siguientes reglas:

“Es así, como a pesar de la existencia de otras vías judiciales por las cuales se pueden reclamar las acreencias laborales, entre ellas las incapacidades, esta Corporación ha reiterado, que cuando no se pagan oportunamente las incapacidades debidamente certificadas al trabajador y con ello se vulneran de paso derechos constitucionales, el juez de tutela se legitima para pronunciarse sobre el fondo del asunto con el fin de neutralizar el perjuicio irremediable al que se ve sometido el asalariado y su núcleo familiar¹”.

(...)

“Cuando quiera que no se paguen las incapacidades laborales de manera oportuna y completa, se afecta el mínimo vital del trabajador y el de su familia, razón por lo cual la acción de tutela es procedente. La Corte ha sostenido que al determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela en aquellos eventos en donde se comprueba la existencia de personas en circunstancias de debilidad manifiesta, por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por la carencia de ingreso económico alguno, por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores de edad y/o por su situación de desplazamiento forzado, entre otras; que dependen económicamente de la prestación reclamada y que carecen de capacidad económica para garantizarse su propia subsistencia, se exige del juez un análisis de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional. Así mismo, es importante resaltar que los requisitos para la procedencia de la acción de tutela en tratándose del pago de acreencias laborales –como son las incapacidades laborales-, deben ser analizados con mayor flexibilidad, en atención a que los peticionarios son sujetos de especial protección constitucional²”.

2.3. Derecho al mínimo vital

Ha dicho la Corte Constitucional frente al tema del mínimo vital que en cada caso concreto debe valorarse según las circunstancias del individuo y sus necesidades básicas, en tanto lo que para algunas personas puede significar una necesidad mínima, para otras no, pues ello incluye aspectos tales como educación y recreación, que satisfacen de suyo el derecho a la dignidad humana. Al respecto dice la Corte:

“El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser evaluado desde un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que quien alega su vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, SALUD, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana”.³

En cuanto a la carencia de ingresos suficientes causados por la enfermedad proveniente de la labor desempeñada a lo largo de su vida, a lo que se suma la vulnerabilidad que causa al mínimo vital y consecuente dignidad humana que menoscaba en este caso la conexión con el derecho fundamental del acceso al derecho fundamental a la seguridad social, menciona la Corte que:

¹ sentencia T-468 de 2010

² Sentencia T-182 de 2011.

³ Sentencia T-581^o DE 2011. M.P. Mauricio González Cuervo

“En el sistema universal de protección de derechos humanos, el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), dispone la garantía del derecho a la seguridad social, entendido de vital importancia para:

*“(…) garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto. [Además], “(…) el derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) **la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar;** b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.”⁴*

2.4. Análisis del caso Concreto:

De acuerdo al problema jurídico planteado, se pasan a analizar los reparos efectuados al fallo de instancia, motivo por el que inicialmente se ahondará en el tema relacionado con el cumplimiento del principio de inmediatez en el caso de marras, pues la determinación de primera instancia se fundó en la no confluencia de tal aspecto y por consiguiente no se efectuó un análisis del fondo de los supuestos facticos y jurídicos planteados por el actor constitucional.

Pues bien se debe precisar que las incapacidades médicas que el señor Alexander Hernando González Suarez pretende le sean reconocidas y se disponga su pago mediante la presente acción de amparo, corresponden a las prescritas por sus médicos tratantes desde el mes de noviembre de 2016 y hasta el mes de octubre de la actual calenda, las cuales han sido formuladas de forma constante y sin interrupción desde la primer data mencionada, es decir, que contrario a lo determinado por la juez a quo en el caso de marras si concurre el principio de inmediatez, toda vez que la presunta omisión que frente al aludido actor constitucional se ha generado por la falta de pago de tales rubros ha permanecido en el tiempo de forma continua hasta el presente año, razón suficiente que la presente acción de tutela sea procedente y se haga un análisis de fondo frente a las pretensiones enlistas por el actor constitucional.

En relación a dicho aspecto la H. Corte Constitucional en Sentencia T-161 de 2019, preciso:

“... la propia jurisprudencia en la materia ha considerado que “(…) no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición de la tutela, (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.

Así las cosas, este Tribunal ha reconocido la posibilidad de flexibilizar el estudio de la configuración del presupuesto de inmediatez, cuando: (i) evidencie que la vulneración se ha prolongado indefinidamente o es continuada, independientemente de que el hecho a partir del cual se inició la aludida

⁴ *Ibidem*

vulneración sea lejano en el tiempo, o (ii) cuando atendiendo a la situación de la persona no sea posible exigirle que acuda a un juez, so pena de imponerle una carga desproporcionada.

Conforme lo expuesto, encuentra la Sala que para el caso objeto de revisión, el requisito de inmediatez de encuentra superado. Ello, por cuanto la vulneración de los derechos invocados por el actor es continuada y persiste toda vez que se ha prologando en el tiempo y a la fecha este último sigue sin percibir, por parte de las accionadas, el pago de las incapacidades superiores a los 180 días que le fueron otorgadas, las cuales afirma, suman un total de 1051 días.

Por lo anterior, se advierte la necesidad de dilucidar el fondo del asunto con el objeto de establecer si hay lugar a la protección invocada como consecuencia de probarse la violación de los derechos cuya garantía, en palabras de la Corte, "(...) no se agota con el simple paso del tiempo, sino que continua vigente mientras el bien o interés que se pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para evitar que se consume un daño antijurídico de forma irreparable".

De otro lado cabe advertir que en el cartulario existe manifestación expresa por parte del señor Alexander Hernando González Suarez que previo a esta acción de tutela y en el año 2016 el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales emitió sentencia en la cual amparo sus derechos fundamentales y ordenó a CAFESALUD EPS en liquidación pagarle las incapacidades medicas continuas superiores a los 540 días, no obstante, luego de revisar dicha providencia judicial de la cual se aportó una copia al presente cartulario se colige que esa determinación limitó el pago de las incapacidades que superan los citados días pero solo las que se prescribieron hasta el 23 de noviembre de 2016, motivo suficiente para hacer viable la presente acción de tutela pues las que aquí se procuran son las formuladas luego de dicha data, es decir, las que no cobijan la referida sentencia.

Así las cosas y ante la evidente procedencia de la actual acción de tutela, se pasara a dilucidar en cabeza de quien está la obligación del pago de las incapacidades aquí pretendidas, pues es palmario que la falta de pago de tales rubros ha generado una notoria transgresión del derecho fundamental al mínimo vital del señor Alexander Hernando González Suarez, pues este manifestó que no cuenta con los recursos económicos suficientes para garantizar las condiciones mínimas suyas y de su núcleo familiar que está integrado por él y su esposa, situación que no fue desvirtuada por la entidad accionada, razón por la se revocará el fallo de primera instancia y se ampara su derecho al mínimo vital.

Aunado a lo anterior este despacho judicial señala que la H. Corte Constitucional en relación al tema de la responsabilidad en el pago de incapacidades médicas a través de la sentencia T-401 de 2017, realizó un recuento normativo y jurisprudencial para determinar a cargo de que entidades esta la obligación de pagarlas cuando le sean prescritas a los usuarios del SGSSS, frente a lo cual señaló que

*"(i) Los primeros dos días de incapacidad el **empleador** deberá asumir el pago del auxilio correspondiente.*

*(ii) Desde el tercer día hasta el día 180 de incapacidad, la obligación de sufragar las incapacidades se encuentra a cargo de las **EPS**.*

(iii) A partir del día 180 y hasta el día 540 de incapacidad, la prestación económica corresponde, por regla general, a las AFP, sin importar si el concepto de rehabilitación emitido por la entidad promotora de salud es favorable o desfavorable.

(iv) No obstante, existe una excepción a la regla anterior. Como se indicó anteriormente, el concepto de rehabilitación debe ser emitido por las entidades promotoras de salud antes del día 120 de incapacidad y debe ser enviado a la AFP antes del día 150. Si después de los 180 días iniciales las EPS no han expedido el concepto de rehabilitación, serán responsables del pago de un subsidio equivalente a la incapacidad temporal, con cargo a sus propios recursos hasta tanto sea emitido dicho concepto.

De este modo, es claro que la AFP debe asumir el pago de incapacidades desde el día 181 al 540, a menos que la EPS haya inobservado sus obligaciones, como se explicó previamente.

Reconocimiento de incapacidades laborales posteriores al día 540.

(...)

...el Legislador asignó la responsabilidad de sufragar las incapacidades superiores a 540 días a las EPS, quienes podrán perseguir el reconocimiento y pago de las sumas canceladas por dicho concepto ante la entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo prescrito en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015". (Subraya fuera de texto

Colige este dependencia judicial que a quien corresponde hacerse cargo de las incapacidades médicas rogadas mediante la actual acción de tutela por el señor Alexander Hernando González Suarez es a MEDIMAS EPS, toda vez que las mismas superen los 540 días continuos de incapacidad, así se colige de la revisión de la citada sentencia de tutela N° 256 proferida el 15 de diciembre de 2016 por el por el Juzgado Primero Penal Municipal de con Función de Control de Garantías de Manizales, pues al 26 de noviembre de 2016 las incapacidades que le habían prescrito al mencionado actor constitucional superaban el referido lapso y las que aquí se pretenden son las prescritas de forma constante e ininterrumpida desde la anterior data y hasta el 6 de septiembre de 2020, así se evidencia en las copias de las prescripciones que obran en el cartulario.

En síntesis el pago de incapacidades médicas que el mencionado tiene pendientes de ser reconocidas y pagadas, por mandato legal le corresponde cubrirlas a MEDIMAS EPS en su condición de EPS a la cual se encuentra adscrito actualmente el actor dado que están superen los 540 días continuos de incapacidad y ello lo debe hacer hasta tanto el paciente sea reintegrado a su puesto de trabajo o calificado un PCL superior al 50 % que le permita acceder al posible reconocimiento de una pensión de invalidez, además la prescripción de tales imposibilidades para trabajar implica que a la fecha el señor no cumple las condiciones para ser reintegrado a su puesto de trabajo y según se manifestó las calificaciones de PCL que le han hecho no superan el citado porcentaje .

La citada sentencia proferida por el Máximo Órgano de cierre Constitucional señaló frente al tema que "(...) las incapacidades que superen los 540 días para personas que no han tenido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, deben ser asumidas por las entidades promotoras de salud en donde se encuentren afiliados los reclamantes".

Finalmente se debe precisar que las incapacidades médicas que se le adeudan al señor Alexander Hernando González Suarez, fueron prescritas desde el 2016 y cuando este está adscrito a la EPS CAFESALUD en liquidación, sin embargo y contrario a lo manifiesto por MEDIMAS EPS en la contestación allegada a este trámite, la última entidad prestadora de servicios de salud mencionada es quien debe hacerse cargo del pago de tales rubros y que corresponden a las incapacidades medicas continuas que superan los 540 días, dado que desde el momento en que se avaló la cesión íntegra de activos, pasivos, contratos y de usuario de la primer a la segunda EPS, la segunda debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que en materia de prestación de servicios de salud se encontraban pendientes y estaban cabeza de la primera, dentro de las cuales se haya el pago de incapacidades médicas, así lo preciso la H. Corte Constitucional en Sentencia T-489 de 2018 y lo hizo de la siguiente manera:

“... es MEDIMÁS EPS quien actualmente tiene la obligación constitucional y legal de garantizar a la accionante el reconocimiento de la licencia de maternidad, dado que, entre ambas entidades se avaló una cesión completa e íntegra de activos, de pasivos, de contratos y de usuarios^[41].

En el presente asunto, la acción de tutela se dirigió contra CAFESALUD EPS y MEDIMÁS EPS. La primera, a la cual estaba afiliada la accionante, dos meses después del nacimiento de su hija^[42] entró en un plan de reorganización que dio lugar a la cesión de todos sus activos, pasivos, contratos y específicamente de los afiliados a la segunda, creada con ocasión de la mencionada operación administrativa, la cual como se advirtió previamente, fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 2426 del 19 de julio de 2017^[43].

Por esta razón es MEDIMÁS EPS quien debe reconocer y pagar a la accionante su licencia de maternidad y no CAFESALUD EPS, pues esta entidad ya no existe y en virtud de la figura del contrato de cesión, es MEDIMÁS EPS quien asumió todo aquello que en su momento tuvo a su cargo la EPS anterior.

La Sala concluye que la accionante no tiene por qué soportar la demora en los trámites administrativos de cesión, y por lo tanto no es de recibo para esta Sala el argumento de la accionada MEDIMÁS EPS al afirmar que es CAFESALUD EPS quien no reconoció la licencia de maternidad y por esto, debe la actora dirigirse a esta entidad, que valga decir, para efectos jurídicos ya no existe.

...

Para esta Sala de Revisión, la negativa de MEDIMÁS EPS de negarle a la accionante el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad no tiene justificación alguna y le corresponde a esta entidad la obligación constitucional y legal de garantizar a la peticionaria el reconocimiento de la licencia de maternidad, toda vez que entre ambas entidades se avaló una cesión completa e íntegra de activos, de pasivos, de contratos y de usuarios.

El argumento de MEDIMÁS EPS para negar la prestación económica de la licencia de maternidad, según el cual la incapacidad fue otorgada con anterioridad al 1 de agosto de 2017 no resulta válido, si se tiene en cuenta que es al Sistema General de Seguridad Social en Salud al que le corresponde cubrir las prestaciones por concepto de la mencionada licencia que se originen con ocasión del nacimiento de un niño cuya madre se encuentra afiliada al régimen contributivo.

...

Conforme con lo anterior, encuentra la Sala que MEDIMÁS EPS vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad humana de la accionante, al negarle el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, bajo el argumento según el cual dicha prestación económica se causó antes del 1 de agosto de 2017”.

De conformidad a los argumentos exhibidos el fallo de primera instancia será revocado en su integridad y en su lugar se amparará el derecho fundamental al **MÍNIMO VITAL** del señor **ALEXANDER HUMBERTO GONZÁLEZ SUAREZ** y en consecuencia se ordenará a **MEDIMAS EPS** que en el termino de cuarenta y ocho hora siguientes a la notificación de la presente providencia reconozca y pague de forma efectiva las incapacidades médicas que le fueron prescritas al mencionado actor constitucional desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 6 de septiembre de 2020 y las que en adelante le sean formuladas hasta tanto tenga una calificación de su PCL superior al 50 % que le permita procurar el reconocimiento de una pensión de invalidez o sea reintegrado a su puesto de trabajo.

Se le advierte al actor que las incapacidades medicas comprendidas entre el 11 de noviembre y 23 de noviembre de 2016, no se ordena su pago a través de este trámite, dado que las mismas las cubre la sentencia de tutela plurimencionada y que fue proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de con Función de Control de Garantías de Manizales y por lo tanto para obtener su pago debe acudir al incidente de desacato por el incumplimiento de tal providencia.

Por lo anteriormente discurrido, **EL JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR El fallo proferido el **8 de octubre de 2020**, por el **JUZGADO DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES** con ocasión de la **ACCIÓN DE TUTELA** presentada por el señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** contra **MEDIMAS EPS**.

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al **MÍNIMO VITAL** del señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** identificado con la C.C. **9.971.797**, por lo dicho en la parte motiva

TERCERO: ORDENAR a **MEDIMAS EPS** que en el término de cuarenta y ocho hora siguientes a la notificación de la presente providencia **RECONOZCA Y PAGUE DE FORMA EFECTIVA** las **INCAPACIDADES MÉDICAS** que le fueron prescritas a señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** identificado con la C.C. **9.971.797** desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 6 de septiembre de 2020 y las que en adelante le sean formuladas hasta tanto tenga una calificación de su PCL superior al 50 % que le permita procurar el reconocimiento de una pensión de invalidez o sea reintegrado a su puesto de trabajo.

CUARTO: ADVERTIR al señor **ALEXANDER HERNANDO GONZÁLEZ SUAREZ** que las incapacidades medicas comprendidas entre el 11 de noviembre y 23 de noviembre de 2016, no se ordena su pago a través de este

trámite, dado que las mismas las cubre la sentencia de tutela N°256 proferida por el 15 de diciembre de 2016 por el Juzgado Primero Penal Municipal de con Función de Control de Garantías de Manizales y por lo tanto para obtener su pago debe acudir al incidente de desacato por el incumplimiento de tal providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SEXTO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional por la Secretaría del Despacho, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

**GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO MANIZALES**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

b6921a92c81a2ec482319c60137f5d515b53417556b298744d303032e0445507

Documento generado en 12/11/2020 05:47:03 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**